



La UE prepara una cumbre para intervenir y rebajar los precios de la electricidad

Bruselas reabre la discusión del mercado marginalista y busca afrontar los precios cero | Italia recorta en 3.000 millones los recibos con una fórmula similar a la ‘excepción ibérica’

Rubén Esteller MADRID.

La Comisión Europea prepara un paquete de medidas para afrontar los elevados costes de la electricidad y reducir el diferencial de competitividad existente para la industria frente a EEUU o China.

El próximo 6 de marzo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha convocado una reunión para analizar las posibles orientaciones de las medidas a adoptar para reducir el precio de la energía.

La idea inicial es adoptar una serie de medidas que permitan desacoplar los precios del gas y de la electricidad y afrontar el impacto de las crecientes horas a precios cero o negativos que se están registrando en Europa y que comienzan a poner contra las cuerdas a un buen número de promotores de renovables.

La convocatoria de este encuentro se produce al mismo tiempo que el Ejecutivo comunitario ha retirado su plan de presentar un paquete de medidas que tenía ya calendarizado para el 10 de marzo.

La Comisión pretendía dar a conocer los avances llevados a cabo por el grupo de trabajo que constituyó hace casi un año para estudiar las medidas a adoptar, pero ahora parece que las propuestas volverán a pasar por el Consejo Europeo.

Los cambios en los planes de Bruselas se producen después de que el pasado 12 de febrero, a petición del presidente del Consejo Europeo, António Costa, se celebrase una reunión entre los líderes europeos para retomar la agenda de competitividad del continente.

Según fuentes consultadas por este diario, dentro del debate, jugó un papel protagonista el orden de mérito de las tecnologías en el mercado mayorista y su carácter marginalista, un debate que parecía abandonado tras la última reforma del mismo pero que vuelve a la primera línea de discusión en Europa.

La Comisión preparaba un paquete de actuación con medidas inmediatas y reformas estructurales para abaratar la energía sin frenar la transición atacando tres palancas: el coste del suministro, los peajes y costes de red, y los impuestos y cargos.

Para ello, Bruselas anima a los Estados miembros a ajustar la fiscalidad energética (incluido IVA y gravámenes) y a rediseñar tarifas y peajes para premiar la flexibilidad y el consumo eficiente de la red, reforzando la protección frente a la po-



Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con Giorgia Meloni, primera ministra italiana. EFE

La banca teme que los cambios en Italia sean un precedente para España

breza energética y facilitando el cambiar a ofertas más baratas.

En paralelo, la UE propone acelerar el despliegue de renovables, redes y almacenamiento mediante simplificación y acortamiento de permisos (con una nueva directiva de permisos), y expandir y modernizar redes e interconexiones con el “paquete europeo de redes” que contará con el apoyo del BEI con un paquete específico para fabricación

y cadena de suministro para acelerar inversiones.

Para reducir la exposición a la volatilidad del gas en el precio de la electricidad, Bruselas pretende impulsar contratos a largo plazo (PPAs, contratos por diferencia u otros esquemas de estabilización) y mecanismos de reducción de riesgo, incluyendo un piloto con el BEI para respaldar PPAs, además de medidas para profundizar mercados de cobertura.

En el mercado del gas, la UE prevé reforzar la supervisión y transparencia (con coordinación entre reguladores energéticos y financieros) a través de un grupo de trabajo que analice posibles ajustes para evitar distorsiones.

Finalmente, plantea un “contrato tripartito” entre sector público,

promotores de energía limpia e industria para movilizar inversión y cerrar acuerdos de demanda que den estabilidad de precios, y un paquete de preparación ante crisis para coordinar respuestas y minimizar picos de precios cuando haya shocks de oferta o tensiones en el sistema.

Las propuestas en análisis por parte de la Comisión han chocado con las actuaciones que están llevando a cabo individualmente los distintos países europeos.

Alemania aprobó un paquete de ayudas para su industria de más de 27.000 millones de euros que generó un profundo rechazo por parte de otros países con menores capacidades financieras.

El 15 de diciembre, en el Consejo Europeo, España y Portugal en-

cabezaron una queja formal que fue respaldada por varios países.

El último paso, no obstante, lo ha dado Italia. El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado un decreto con dos medidas principales orientadas a abaratar el precio mayorista de la electricidad a partir del 1 de enero de 2027: reembolsar a las centrales de gas determinados componentes de los peajes de transporte de gas y, además, devolver parcialmente costes del EU ETS (CO2), con un tope equivalente al coste de emisiones de una central de ciclo combinado “eficiente”. En ambos casos, el coste de los reembolsos se recuperaría mediante cargos sobre las retiradas de electricidad, es decir, trasladándolo a los consumidores.

El decreto italiano que analizan Goldman Sachs, BofA y Citi aseguran que es una intervención para abaratar la factura actuando a la vez sobre medidas presupuestarias (subvenciones, rebaja de cargos y refuerzo de tarifa social) y sobre la formación de precios del mercado.

El paquete total se mueve, según Goldman Sachs, en un orden de magnitud de 2.500-3.000 millones de euros anuales y abre incertidumbre a corto plazo para las *utilities*, por la posibilidad de tocar componentes ligados al CO2 y por el in-

Meloni anuncia los cambios justo antes del plan estratégico de Enel y Endesa

tento de empujar el mercado mayorista a la baja con más oferta renovable y cambios en el gas.

Los cambios se producen a las puertas del nuevo plan estratégico de Enel y Endesa, que queda expuesta porque una caída del pool termina trasladándose a los contratos minoristas y comprime el margen. El otro eje de riesgo es la “reordenación” de las renovables maduras cuando expiran sus regímenes de apoyo. BofA advertía de un posible “precio administrativo” de respaldo muy bajo para activos que salgan de incentivos si no repotencian o no firman PPAs largos, lo que recortaría ingresos y fuerza una migración hacia *repowering* o contratación a largo plazo. La banca teme que sea un precedente para España.